



Junta de Castilla y León

Consejería de Desregulación, Familia
y Ayudas Sociales

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES POR LA QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FORMULADA POR D. , N.º 4155 B/2026..

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. D. , con fecha 14 de agosto de 2026 presentó solicitud de información pública en el registro de la Administración General del Estado, que tuvo entrada en la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales el mismo día y se le asignó el número 3844.B/2025.

Su solicitud se fundamenta en el derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, LTAIBG en adelante, y al amparo de este derecho solicita la siguiente información:

“Solicito la siguiente información:

1. Responsables del Junta de Castilla y León en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 de las inspecciones y sanciones por la venta, suministro y consumo de alcohol de menores de edad en Castilla y León.

2. Responsables del Junta de Castilla y León en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 de la protección integral de los menores en Castilla y León id.

3. Número de menores de en Castilla y León de 12 a 17 años en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, por cada edad.

4. Número de menores de en Castilla y León de 12 a 17 años en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 que han consumido drogas (alcohol, tabaco, cannabis, hachís, cocaína, heroína y otras drogas), por cada edad y por cada droga.

INSPECCIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL POR PARTE DE MENORES.”

5. Número de inspecciones realizadas en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 a establecimientos para detectar la venta y consumo de alcohol, por parte de menores de edad. Indicando fechas, lugares y horarios. Número de locales inspeccionados y tiempo de inspección en cada local. Tipo de local.

6. Número de actas de inspección realizadas en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Identificación, fecha y hora, resultado. Copia, eliminando los datos personales.

7. Número de inspecciones específicas para comprobar la venta o suministro de alcohol a menores.

8. Número de infracciones detectadas en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Indicando el número de cada año.

9. Número de expedientes sancionadores en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Indicando el número de cada año.

10. Importe de las sanciones individuales y el conjunto del importe de las sanciones.

11. Número de expedientes sancionadores archivados en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Indicando el número de cada año y el motivo. Y el importe de la sanción prevista.

12. Importe de las sanciones no cobradas por año.

CONSUMO DE ALCOHOL EN LA VÍA PÚBLICA (BOTELLONES)

1. Número de inspecciones realizadas en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Indicando fechas, lugares y horarios.

2. Número de actas de inspección realizadas en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Identificación, fecha y hora, resultado. Copia, eliminando los datos personales.
3. Número de inspecciones específicas para comprobar el consumo de alcohol de menores.
4. Número de infracciones detectadas en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Indicando el número de cada año. Indicando las de adultos y de menores por separado.
5. Número de expedientes sancionadores en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Indicando el número de cada año. Indicando las de adultos y de menores por separado.
6. Importe de las sanciones individuales y el conjunto del importe de las sanciones. Indicando las de adultos y de menores por separado, indicando el sexo.
7. Número de expedientes sancionadores archivados en los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Indicando el número de cada año y el motivo. Y el importe de la sanción prevista. Indicando las de adultos y de menores por separado.
8. Importe de las sanciones no cobradas por año. Indicando las de adultos y de menores por separado.
9. Numero de remisiones de menores y adultos a programas de reeducación, indicando las de cada año: 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, separando las de menores y adultos por sexo.
10. Indicando el nombre de la empresa, fundación o asociación que realiza la educación, el coste económico de la misma y quien abona dicho importe, indicando las de cada año: 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, separando las de menores y adultos por sexo.

PRESUNTA INCITACIÓN AL CONSUMO DE ALCOHOL POR PARTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

1. Actuaciones realizadas contra los responsables de la presunta incitación al consumo de “droga” en Castilla y León.
2. Nombre de los responsables de la presunta promoción de bebidas alcohólicas (droga) por parte de la Junta de Castilla y León, indicando los de cada año: 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.
3. Importes de dinero público utilizado para la presunta promoción de bebidas alcohólicas (droga) por parte de la Junta de Castilla y León, indicando los de cada año: 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.
4. Importes destinados a la industria del vino, indicando los de cada año: 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.
5. Importes de dinero público utilizado para promocionar rutas del vino, indicando los de cada año: 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.
6. Importes de dinero público utilizado para realizar catas de vino y otras promociones como en Intur, Fitur indicando los de cada año: 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.”

SEGUNDO. El Comisionado para las Adicciones informa que al amparo de lo previsto en la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, la detección de los hechos y el levantamiento del acta corresponde a la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional o a los servicios de inspección de la Junta.

El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o fuera de los espacios públicos en los que está permitido, está tipificada como infracción leve y la venta, entrega, dispensación, ofrecimiento o suministro de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años, está tipificada como infracción grave, por lo que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al Ayuntamiento en el que se haya cometido la infracción.

Corresponde a la Junta de Castilla y León la incoación, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores cuando la infracción esté tipificada como muy grave.



Junta de Castilla y León

Consejería de Desregulación, Familia
y Ayudas Sociales

En resumen, la inspección corresponde a la Junta de Castilla y León, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, pero la potestad sancionadora por la venta de alcohol a menores o por consumo en la calle, recae, con carácter general, en el alcalde del municipio donde se haya cometido la infracción. Por lo que los datos están dispersos en expedientes municipales o memorias de actividad, y no existe una base autonómica pública consolidada para poder ofrecer la información solicitada..

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 7.1 a) de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León, la competencia para resolver las solicitudes de acceso a la información pública referida a documentos en poder de su Consejería o de sus Organismos Autónomos corresponde al titular de la misma, en este caso al titular de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Por Orden del Consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de 17 de julio de 2026, se delega la firma, en la persona del titular de la Secretaría de la Consejería, de los actos administrativos dictados en ejercicio de las competencias en materia de acceso a información pública en el ámbito de la Consejería.

SEGUNDO.- Son aplicables para la tramitación y resolución de las solicitudes en materia de acceso a la información pública, la LTAIBG, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León y el Decreto 7/2016, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Castilla y León. En concreto el derecho de acceso a la información pública está reconocido y regulado en el art. 105.b) Constitución Española, en el apartado d) del artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en el capítulo III del Título I de la LTAIBG y en el capítulo II del Título I de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León.

TERCERO. - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se entiende por información pública "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión del organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas.

En el caso concreto que nos ocupa, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la información solicitada no obra en su totalidad en poder de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, sino que, en su mayor parte se encuentra en poder de los 2248 municipios de Castilla y León.

También es necesario tener en cuenta que el apartado 1.c) del artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece como causa de inadmisión a trámite de las solicitudes de acceso a la información pública las relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

En este sentido, el criterio interpretativo nº 4/2026 de 17 de junio de 2026 del Consejo de Transparencia señala que la «reelaboración» como causa de inadmisión se limita exclusivamente a aquellos casos en que el cumplimiento del acceso a lo solicitado requiere de un tratamiento de la información (datos, documentos, etc.) de carácter complejo fundamentado en criterios objetivos. En los términos establecidos por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810): «La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas».

Ese carácter complejo puede venir determinado por la necesidad de realizar el tratamiento a partir de «una información pública dispersa y diseminada», que requiera de una «labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es (en el caso enjuiciado en la sentencia) clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información», o que la misma se encuentre en soportes (físicos e informáticos) diversos. Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810).

Se incluye, también, en el concepto de reelaboración aquella información que, al no encontrarse en su totalidad en el órgano al que se dirige la solicitud, ha de ser recabada de otros órganos, Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:1256).

Teniendo en cuenta que no existe una base autonómica pública consolidada para poder ofrecer la información solicitada y que los datos se encuentran dispersos, concurre en el presente caso la causa de inadmisión de previa reelaboración prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno pues sería necesario recabar la información, lo que conllevaría la realización de una labor casi de imposible cumplimiento.

Por último, concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1d) de la Ley 19/2013, carácter abusivo de la solicitud.

A tales efectos, hay que tener en cuenta la Sentencia 321/2019, de 10 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, donde se fundamentaba la concurrencia de aquella causa de inadmisión en los siguientes términos: “(...) *La solicitud del interesado, que tiene un carácter esencialmente general (...), implicaría la utilización de importantes recursos humanos y materiales de la Administración Pública, en detrimento del normal desenvolvimiento del organismo concernido (...). Como ya señaló la Sala en sentencia de 30 de mayo de 2019, dictada en el recurso de apelación 1/2019 (...), una solicitud de información de estas características, por su volumen, extensión, período de tiempo, identificación y medios para instrumentar la petición, además de ocasionar una disfunción manifiesta, no deja de ser un desiderátum no acorde con el espíritu y finalidad de la normativa de transparencia. Una solicitud de estas características no deja de ser una instrumentación de la normativa de transparencia con una finalidad -cierto es, ya se ha dicho, que la ley no exige motivación, aunque sí puede tenerse en cuenta que, repetimos, en criterio de la Sala no se acomoda al espíritu y finalidad de la norma, más allá, desde luego, de intereses puramente particulares*”.



Junta de Castilla y León

Consejería de Desregulación, Familia
y Ayudas Sociales

Del mismo modo, se alude a la Sentencia 176/2019, de 28 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de León, que señala lo siguiente: *“El ejercicio abusivo de un derecho ha sido analizado por reiterada jurisprudencia (por todas, se destaca la Sentencia de 1 de febrero de 2006. Esta doctrina jurisprudencial se basa en la existencia de unos límites impuestos al ejercicio de los derechos, límites de orden moral, teleológico y social. Se trata de una institución de equidad que, para poder ser apreciada, exige la verificación de que la conducta valorada cumple los siguientes requisitos: (1) Aparentemente es correcta, pero representa, en realidad, una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna; y (2) Genera unos efectos negativos, normalmente daños y perjuicios. Además, de la base fáctica debe resultar patente (a) una circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo); y (b) una circunstancia objetiva de exceso en el ejercicio del derecho (anormalidad en el ejercicio del derecho)”*.

En el caso concreto que nos ocupa se solicita información estadística de 28 áreas distintas, con datos de los años 2012, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, desagregados conforme a diversos criterios, con copia anonimizada de documentación en algunos casos, de competencia de diversas administraciones, lo que claramente extralimita lo que es el ejercicio normal del derecho de acceso a información pública y que supondría no solo el colapso de la administración de la comunidad autónoma, sino también de los municipios de Castilla y León.

Por todo lo expuesto, en virtud de los antecedentes de hecho y en base a los fundamentos de derecho, y vista la propuesta del Servicio de Estudios y Documentación

RESUELVO

INADMITIR la solicitud formulada por D. _____, con número 4155B/2026, por no obrar toda la información en poder de la Administración de Castilla y León (artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) ser necesaria una reelaboración de la información (artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013) y ser abusiva (artículo 18.1.d).

Notifíquese la presente orden al interesado, indicando que contra la misma podrá interponerse, potestativamente, reclamación ante la Comisión de Transparencia, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, computado desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En Valladolid, a la fecha de la firma electrónica.
(P.D.F. Orden del Consejero de 17 de julio de 2026)
EL SECRETARIO GENERAL